

11.- Que, de acuerdo con lo establecido en el número 2) de la letra E del Reglamento, se exige para los que antes trabajaban en el Cementerio, no haber transgredido los reglamentos en lo relativo al pago de los aranceles de derechos por obras realizadas y no haber ejecutado obras sin la autorización correspondiente. Asimismo, el reglamento exige que se acredite la calidad de maestro de primera de los interesados, según el número 5, letra d).

12.- Que, tanto el señor Cartagena como el señor Valenzuela reconocen no haber pagado derechos o aranceles y, en cuanto al señor Austelio Godoy, no ha acreditado su calidad de maestro de primera como lo exige el reglamento, con lo cual no cumplen con lo establecido en dicho ordenamiento interno.

13.- Que, el Cementerio en cuestión tiene amplias facultades para arreglar toda sepultura que no se encuentre en buen estado y que no sea reparada por el propietario y, en consecuencia, no se vulnera el derecho del propietario de la tumba al exigírsele que el contratista que practique una obra en ella aparezca inscrito en el registro que se lleva al efecto.

14.- Que, el reglamento sobre arreglos de sepulturas y nichos se dictó en virtud de facultades indicadas en la ley de cementerios contenida en el decreto N° 357, cuyo artículo primero faculta a los cementerios para dictar sus reglamentos internos.

15.- Que, el cobro de aranceles está contemplado en el artículo 70 del reglamento interno del Cementerio Metropolitano que fue aprobado por decreto N° 7.705, de 28 de julio de 1964, del Ministerio de Salud, que autorizó el funcionamiento de dicho Cementerio.

16.- Que, es legítimo que el Cementerio Metropolitano realice por sí mismo trabajos de hermoseamiento de las sepulturas, no constituyendo esta actividad competencia desleal, como indican los denunciantes.

17.- Que, esta Comisión, resolviendo esta incidencia declara que la Sociedad Cementerio Metropolitano Limitada ha dado cumplimiento a la resolución N° 123 y consecuentemente al reglamento que se dictó, el cual fue revisado y aprobado por la Fiscalía Nacional Económica, por lo que procede rechazar la incidencia de incumplimiento de la resolución respectiva dictada por esta Comisión.

Rol N° 156-82.

Pronunciada por los señores Víctor Manuel Rivas del Canto, ex-Ministro de la Excma. Corte Suprema y ex-Presidente de la Comisión; Arnaldo Gorziglia

Balbi, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile; Juan Ignacio Varas Castellón, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Chile; Abraham Dueñas Strugo, subrogando al señor Director del Instituto Nacional de Estadísticas y Adolfo Amenábar Castro, subrogando al señor Tesorero General de la República. No firma el señor Amenábar no obstante haber concurrido al acuerdo por encontrarse ausente al momento de la firma.

RESOLUCION N° 342

(27 de marzo de 1990)

Doctrina:

Acoge recurso de reclamación deducido por "Chilectra Metropolitana", dejando sin efecto el dictamen N° 731/85 de fecha 7 de febrero de 1990, de la H. Comisión Preventiva Central. Tal dictamen absolvió consulta de "Sinel S.A.", propietaria de la Empresa Eléctrica Colina, sobre posibles abusos de posición monopólica de Chilectra, declarando el que si bien es facultativo para la autoridad el otorgar superposición de concesiones de distribución eléctrica, es improcedente e inconveniente en este caso, toda vez que altera las normas de la libre competencia el hecho que exista una gran disparidad entre las empresas concesionarias, de modo que tal situación equivalga a la desaparición de la empresa menor.

La Comisión, resolvió que la superposición de concesiones a empresas eléctricas en una misma zona geográfica tiende a fomentar la libre competencia, y a beneficiar a los usuarios mediante la rebaja de tarifas y mejoramiento del servicio, siempre y cuando, el nuevo concesionario tenga iguales derechos y obligaciones que el primero en el territorio compartido, lo que sucederá en la medida que las empresas que compiten en esa misma área geográfica lo hagan con el mismo tipo de tarifas, quedando éste determinado necesariamente por la densidad de población de área respectiva.

Vistos y teniendo presente:

1.- La H. Comisión Preventiva Central, por dictamen N° 731-85, de 5 de febrero de 1990, absolviendo una multa de Sinel S.A., propietaria de la Empresa

Eléctrica Colina, sobre posibles abusos de posición monopólica cometidos por la empresa Distribuidora Chilectra Metropolitana S.A., ha declarado lo siguiente:

- a) El criterio de la autoridad al fijar las áreas tarifarias eléctricas ha sido permitir un cobro superior en las áreas de menor densidad poblacional, independientemente de cual es la empresa que distribuye en esa área.
- b) La concesión de distribución eléctrica superpuesta no es obligatoria sino que facultativa para la autoridad, la que deberá considerar, entre otros factores, los efectos que dicha concesión tenga para la libre competencia.
- c) La superposición de concesiones, en sí misma, persigue fomentar la competencia entre empresas que pueden competir en igualdad de condiciones pero, si existe una gran disparidad entre ellas tal competencia se torna imposible y, entonces la autoridad no puede otorgar la segunda concesión pues hacerlo equivale a hacer desaparecer la empresa menor, y
- d) El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción puede otorgar la concesión solicitada por Chilectra Metropolitana con exclusión de la zona concedida a Sinel S.A. pues, en este caso, no se dan las condiciones que permitan algún grado de competencia entre ambas empresas.

2.- Para resolver del modo antedicho, la Comisión tuvo presente que Chilectra Metropolitana ha negado a Sinel S.A., arbitrariamente, el aumento de potencia instalada que le fuere solicitada en tres oportunidades mediante comunicaciones que ni siquiera fueron contestadas y sin que las explicaciones dadas fueran consideradas satisfactorias.

También ha tenido en consideración la circunstancia de que Chilectra Metropolitana ha solicitado concesión sobre una zona que es, a lo menos, diez veces mayor que la zona de concesión de Sinel S.A., de modo que la antedicha limitación no puede ocasionarle perjuicio y, en cambio, permite que subsista una compañía pequeña que, al igual que otras de similares características y de muchas Cooperativas eléctricas, distribuye energía eléctrica en zonas de escasa población que no son atractivas, económicamente, para las grandes empresas eléctricas.

3.- Chilectra Metropolitana S.A. ha deducido recurso de reclamación en contra del dictamen mencionado, fundándose para ello en las siguientes consideraciones:

- a) El dictamen impide que dos concesionarios de distribución de energía eléctrica puedan competir en determinada zona geográfica, con eviden-

tes beneficios para los usuarios, en circunstancias que la legislación sobre electricidad permite la superposición de concesiones.

- b) La apreciación del dictamen es errónea cuando estima que la autoridad, al fijar las áreas tarifarias eléctricas, ha seguido el criterio de permitir un cobro superior en las áreas de menor densidad poblacional, independientemente de cuál es la empresa que distribuye en esa área, pues, no son las áreas geográficas las que han sido encasilladas en uno u otro nivel tarifario, sino las empresas distribuidoras, de suerte que cualquiera sea la zona geográfica en que tales empresas entreguen el suministro, sus tarifas máximas son las mismas.
- c) La competencia entre su representada y Sinel S.A. en el área de concesión geográfica de esta última; no es algo nuevo y, por el contrario, existe y ha existido desde que Sinel se hizo concesionaria en la zona de Colina al adquirir las instalaciones de la ex-Chilectra S.A. Dicha competencia se manifiesta en diversas formas que enumera.
- d) La superposición de concesiones en una misma área geográfica persigue fomentar la competencia entre empresas que pueden competir en igualdad de condiciones. El D.F.L. N° 1 permite dicha competencia entre empresas que pueden tener distinta envergadura y prueba de ello es el artículo 17, del mismo, que autoriza la superposición de concesiones.

Existen diversos ejemplos que avalan sus dichos. Así, en la zona de Curacaví, en Melipilla, en Casablanca y en Puente Alto compiten con Chilectra otras empresas de menor envergadura, a las que se les han fijado tarifas máximas más elevadas, sin que ninguna haya dejado de existir.

- e) Asimismo, los clientes sobre 2.000 kilowatts de potencia conectada, no están obligados a suministrarse energía a través de empresas distribuidoras, por lo que pueden abastecerse directamente de las empresas generadoras. Tal sería el caso de la Cía. Minera Disputada de Las Condes, el Ferrocarril Metropolitano, las grandes textiles, metalúrgicas y otros, lo que obliga a Chilectra a competir con grandes empresas eléctricas, como Endesa, lo cual, lejos de entorpecer la libre competencia, la favorece y beneficia directamente a los usuarios.
- f) No corresponde a la Comisión calificar si debe o no interesar a Chilectra la zona de Colina, desde un punto de vista económico, ya que lo que interesa a su representada es anticiparse y propender al crecimiento y

desarrollo de la actividad de su giro, para lo cual debe reforzar mejorar y ampliar el servicio que presta en la zona norte de la región metropolitana, siendo su principal propósito atender a nuevos clientes y no captar los que actualmente tenga Sinel, sin perjuicio que parece sano para la economía de la zona, que aquéllos tengan la posibilidad de elección.

4.- A juicio de esta Comisión, analizados los antecedentes a que se ha aludido más arriba, debe concluirse que, en principio, la superposición de empresas eléctricas, en una misma zona geográfica, expresamente permitida por la ley, tiende necesariamente a fomentar la libre competencia, con beneficio para los usuarios, en la medida que ella puede traducirse en una rebaja de tarifas y/o en la prestación de un mejor servicio para los consumidores.

No obstante lo anteriormente expresado, es preciso señalar que para que se dé esa libre competencia y con ella se beneficie a los usuarios, tal competencia debe respetar las normas del artículo 17 del D.F.L. N° 1, de 1982, que es el que admite la superposición de concesiones y que dispone que, si así ocurre, el nuevo concesionario tendrá las mismas obligaciones y derechos que el primero en el territorio compartido.

5.- En la especie, la igualdad de derechos y obligaciones tiene lugar si las empresas que compiten en una misma área geográfica lo hacen con el mismo tipo de tarifas, no sucediendo así si una de ellas tiene un tipo de tarifas inferior al de la otra.

6.- Por ende, esta Comisión comparte el criterio de la H. Comisión Preventiva Central, en el sentido que lo que determina el tipo de tarifas que se aplique es la densidad de población del área geográfica de que se trate y no el que la empresa que se superpone pueda tener en un área con distinta densidad poblacional.

De esta forma se logra que los competidores se encuentren en igualdad de condiciones para el desarrollo de sus actividades, sin perjuicio, como se ha destacado, que la competencia se manifieste en rebajas de tarifas a los usuarios o en la prestación de un mejor servicio para ellos.

Vistos y teniendo presente, además, lo prevenido en los artículos 9°, 17 letra e) y 18 del decreto ley N° 211, de 1973.

Se declara:

Que se acoge el recurso de reclamación de Distribuidora Chilectra Metropolitana y se deja sin efecto el dictamen N° 731/85, de 7 de febrero de 1990, de

la H. Comisión Preventiva Central, con expresa declaración que la superposición de concesiones que la autoridad puede conceder a la recurrente en las zonas de Colina debe ser otorgada con el mismo tipo de tarifas que corresponda a dicha área geográfica.

Transcribase a la H. Comisión Preventiva Central.

Notifíquese al señor Fiscal Nacional Económico, a Distribuidora Chilectra Metropolitana S.A. y a Sinel S.A.

Rol N° 376-90.

Pronunciada por los señores Enrique Zurita Camps Ministro de la Excma. Corte Suprema y Presidente de la Comisión; Julio Dittborn Cordua, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Nacional Andrés Bello; Abraham Dueñas Strugo, subrogando al señor Director del Instituto Nacional de Estadísticas, y Fernando Mujica Bezanilla, subrogando al señor Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. No firma el señor Adolfo Amenábar Castro, por encontrarse ausente.

RESOLUCION° 343

(15 de mayo de 1990)

Doctrina:

Rechaza recurso de reclamación deducido en contra del dictamen N° 733/202, de fecha 30 de marzo de 1990, de la H. Comisión Preventiva Central, confirmando en todas sus partes.

Dicho dictamen recayó sobre una denuncia interpuesta en contra del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de concesiones de plantas de revisión técnica clase B para la ciudad de Santiago, y además por considerar la denunciante exigió el número de plantas revisoras para la Región Metropolitana.

A juicio de la Comisión Preventiva Central, respecto del primer hecho denunciado, no cabe intervención a los organismos antimonopolios, siendo su